



**Rama Judicial del Poder Publico**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

Barranquilla, D.E.I. y P, diciembre 13 de 2021.

<b>Radicado</b>	08001-3333-006- <b>2017-00171</b> -00
<b>Medio de control</b>	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
<b>Demandante</b>	Hernando León Gómez
<b>Demandado</b>	Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social "U.G.P.P."
<b>Jueza</b>	Lilia Yaneth Álvarez Quiroz.

**I. ASUNTO A DECIDIR**

Procede el Despacho a dictar sentencia dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, interpuesto por el señor Hernando León Gómez contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social "U.G.P.P.", en adelante UGPP, de conformidad con los artículos 181 y 187 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

**II. ANTECEDENTES**

**2.1 Demanda**

El señor Hernando León Gómez, actuando a través de apoderado judicial, ha promovido demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la UGPP, por medio de la cual formula las siguientes:

**2.2 Pretensiones**

Como pretensiones de demanda, la actora presentó las que a continuación se transcriben:

- "1. Se declare la nulidad de la resolución No. RDP 010901 del 19 de Marzo de 2015.*
- 2. Se le restablezca el Derecho a la indexación de la primera mesada pensional, reconocida en la resolución No. 1811 del 25 de Noviembre de 1.997.*
- 3. Que, como consecuencia del restablecimiento del Derecho, se le reintegren los valores causados por la disminución [de] \$1.275.536 en su mesada pensional a partir del-mes de Agosto - del 2015, más los reajustes de ley.*
- 4. Se declare que los dineros que se le pagaron por concepto de la indexación fueron recibidos de buena fe.*
- 5. Se declare que la parte Demandada al momento de proferir la Resolución RDP 010901 del 19 de Marzo de 2015, aplicó de manera errónea el procedimiento establecido en [el] artículo 19 de la Ley 797 de 2003, por no*

*haberse demostrado la tipificación de un delito cometido por el titular de la pensión para suspenderle el pago de la indexación".*

### **2.3. Hechos**

Al realizar estudio del cuerpo de la demanda y sus anexos, como fundamentos fácticos de las pretensiones de demanda, se resumen los siguientes:

Asegura el demandante, señor Hernando León Gómez, le fue reconocido y otorgado el derecho a su pensión de jubilación, por parte de la hoy extinta entidad Empresa Puertos de Colombia -Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla, mediante la Resolución No. 037141 del 19 de febrero de 1.986, y que ésta fue confirmada por la Resolución No. 029628 del 6 de marzo de 1986, con ingreso a la Nómina de Pensionados a partir del 6 de junio de 1991, por valor de \$205.532.78. El pago del estipendio económico reconocido está hoy a cargo de la encausada UGPP.

Señala que, mediante la Resolución No. 1811 del 25 de noviembre de 1997, expedida por el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia "Foncolpuertos", a la remuneración de retiro se le aplicó una indexación a su primera mesada, con lo cual se elevó el monto pensional a un total de \$1.108.869.00., a partir del 1° de diciembre de 1997; por lo anterior, al mes de julio de 2015, el demandante devengaba una mesada de \$3.447.919.02.

Expresa que luego de haber transcurrido más de 17 años, la encausada UGPP expidió la Resolución RDP 010901 del 19 de marzo de 2015, de manera abrupta, intempestiva, sin respetar el debido proceso y sin causa legal que la justificara, mediante la cual se redujo el monto de la prestación de los iniciales \$ 3.447.919.02 a la suma de \$2.172.383.49. y ordenó la devolución de las sumas pagadas de más al beneficiario. Advierte que la decisión administrativa consideró en su parte motiva que la indexación aplicada en la Resolución No. 1811 del 25 de noviembre de 1997, fue lograda de forma ilegal, razón por la cual se suspendieron sus efectos jurídicos.

Advierte que la pensión de retiro del demandante es un derecho adquirido con carácter de orden público, que es irrenunciable y que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado en la Sentencia de Unificación SU-835 del 2003, que la única forma de revocar un derecho pensional en sede administrativa es que se demuestre que el titular de la pensión haya sido responsable de un hecho delictivo para obtener dicha prestación económica, o que se haya contado con el consentimiento del titular del derecho para ello.

### **2.4. Fundamentos de Derecho, Normas Violadas y Concepto de Violación.**

Como fundamentos de derecho, normas violadas y concepto de su violación, presentó la parte actora los argumentos que a continuación se resumen:

Como constitucionales el derecho al debido proceso administrativo (Artículo 29 de la Constitución Política), en cuanto a la presunción de inocencia, la presunción de buena fe administrativa, los artículos 66,73,74 y 136 del CCA, así como el desconocimiento de precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en materia de revocación directa de actos administrativos de reconocimiento pensional, las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

#### 2.4.1. Cargos de violación:

- A)** Violación al debido proceso, por no observarse en el procedimiento administrativo lo expuesto en la sentencia de exequibilidad C 835 de 2003 de la Corte Constitucional.

Considera que la convocada ha violado la ritualidad procedimental establecida por la Sentencia de constitucionalidad C - 835 del 2003 de la Corte Constitucional, en lo tocante al artículo 19 de la Ley 797 de 2003, en particular, trae a colación algunos apartes de dicho proveído que señalan que, para que un ente proceda a la revocatoria directa de decisiones administrativas que reconocen pensiones, los motivos que sustenten tal revocatoria no deberán expresarse *de manera indeterminada, aislada, ni al margen del debido proceso*, que la responsabilidad del beneficiario de un acto administrativo que se considere derivado de fraudes o conductas dolosas de parte del destinatario de la decisión, quede debidamente establecida, con observancia de principios tales como los de necesidad de la prueba, la publicidad y el principio de contradicción; y cita textualmente a la mencionada providencia, misma que precisa en unos de sus apartes lo siguiente "(...)Así, la decisión revocatoria, en tanto acto reglado que es, deberá sustentarse en una ritualidad sin vicios y en una fundamentación probatoria real, objetiva y trascendente, en la cual confluyan de manera evidente todos los elementos de juicio que llevaron al convencimiento del funcionario competente para resolver(...)" y que sólo procede dicha revocatoria cuando en el tránsito del reconocimiento pensional *"ha mediado un delito"*.

Añade que, la Máxima Instancia Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que cuando hay controversias acerca de la interpretación de un derecho, especialmente cuando se trata del *régimen jurídico aplicable, la aplicación de un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente a uno general*; tales controversias deberán zanjarse ante los jueces competentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por lo cual, considera el demandante que la revocación directa del acto que le otorgó el reconocimiento y pago del incremento de su pensión no debió hacerse sin que mediara la intervención del directo beneficiario de la prestación, es decir, que mediara su consentimiento.

Así entonces, prosigue el demandante, que sólo bajo los lineamientos antes anotados es que la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 19 de la Ley 979 de 2003, que preceptúa la revocatoria de pensiones cuando hay irregularidades, a que haya plena certeza de la comisión de un delito que esté tipificado como tal en la ley penal.

- B)** La prohibición expresa que señala la Corte Constitucional de revocar unilateralmente actos administrativos que reconocen derechos pensionales si no se contó para tal efecto con la venia del beneficiario del acto.

Señala el actor una cita textual de la sentencia de tutela de la Corte Constitucional en T-477 de 2011, la cual sostiene que está expresamente proscrito revocar actos de reconocimiento y pago de pensiones sin que se cuente con la participación del beneficiario de la decisión administrativa, siempre que no se haya demostrado la comisión de fraude; pues ello iría en contravía de lo establecido en los artículos 29 (debido proceso administrativo), 58 (el respeto de los derechos adquiridos con arreglo a la ley) y el artículo 83 (presunción de buena fe y confianza legítima) de la Carta Política.

Explica que, para el caso en estudio, al actor se le otorgó derecho a la pensión mediante la mencionada Resolución No. 037141 del 19 de febrero de 1.986; su ingreso en la nómina de pensionados se produjo el 6 de junio de 1991 y el incremento / indexación de dicho emolumento le fue reconocido por medio de la Resolución No. 1811 del 25 de noviembre de 1997, es decir, luego de haber transcurrido más de cinco (5) años desde que se le reconoció la prestación, hasta su pago; por ende considera que la indexación que ordenó esta última decisión administrativa no debió ser objeto de revocatoria directa.

## **2.5 Contestación de la Demanda por la UGPP.**

La entidad acusada, UGPP al contestar la demanda de la referencia, se opuso a las pretensiones de la misma y señaló que se atenderá a lo que se demuestre en el proceso, que obró dentro del marco de la legalidad, en lo que cabe a un proceso administrativo de revocación del incremento pensional, en tanto que dicha revocatoria se dio con ocasión del cumplimiento de una providencia proferida el 7 de noviembre de 2012 dictada por la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá - Fiscalía Veintidós, por la cual se ordenó que se dejaran sin efectos jurídicos varios actos administrativos, entre ellos la Resolución 1811 del 25 de Noviembre de 1997, que reconoció el incremento pensional al actor, por ello, la UGPP emitió la Resolución RDP 010901 del 19 de Marzo de 2015. Añade que el desconocimiento de lo ordenado por el ente acusador, implicaría incurrir en una omisión grave, que derivaría en un detrimento del patrimonio público.

Advierte la UGPP que, si bien los pagos recibidos por el actor en aplicación de la Resolución 1811 del 25 de Noviembre de 1997 fueron recibidos por éste de buena fe, debe tenerse en cuenta que *el acto administrativo que le reconoció la indexación de su primera mesada fue declarado ilegal por la Fiscalía, por consiguiente, no puede seguir produciendo efectos jurídicos*, que, además de lo anterior, dicho acto fue suspendido de manera provisional, hasta que se profiera una decisión definitiva; que de ninguna manera se ha ordenado descuento alguno de los dineros pagados de más, que tan solo se ha ajustado la mesada al monto que percibía antes de que se aplicara el acto administrativo suspendido por orden de la Fiscalía.

Como medios exceptivos, propuso la UGPP los de *imposibilidad de reconocer la indexación de la primera mesada, cobro de lo no debido, prescripción y buena fe, compensación*, además de la *excepción genérica*.

Comenta que, en numerosos y reiterativos pronunciamientos, la Corte Constitucional ha establecido que *no se está ante la hipótesis de violación del debido proceso administrativo por la revocatoria o suspensión unilateral de un acto administrativo de carácter particular y concreto sin el consentimiento de los afectados*, cuando el fundamento de la suspensión es una medida cautelar tendiente a conjurar el detrimento patrimonial del fisco, derivado de un delito.

Comenta que, para el asunto en estudio, el ajuste o incremento pensional que se suspendió consistió en el *valor incrementado "especial proporcional" de la pensión y que fuera autorizado por el ex director de Foncolpuertos para la época de los hechos*. Que por orden expresa de la Fiscalía General de la Nación, Estructura - Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, dictó resolución de acusación respecto del ex director de la extinta entidad portuaria, y que tomó, como medida preventiva, *dejar sin efectos todos los actos jurídicos y económicos expedidos por él durante su gestión*.

Asegura la encausada que la decisión administrativa cuya nulidad depreca el actor, Resolución RDP 010901 del 19 de marzo de 2015, es un acto administrativo de ejecución, cuya naturaleza esencial es dar cumplimiento a una decisión previa, siendo para el caso la decisión de la Fiscalía Veintidós – Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, la que ordenó la cautela, consistente en suspender los efectos jurídicos de la Resolución No. 1811 del 25 de noviembre de 1997, que ordenó la reliquidación de la pensión de retiro del actor. Así entonces, considera la accionada que, aún pesa orden de suspensión dentro de la medida cautelar impuesta por el ente de investigación; que además de ello, es una medida de carácter provisional, comoquiera que a la fecha, no se ha proferido decisión confirmatoria o revocatoria de la misma, razón por la cual considera que *“no es posible resolver la solicitud de indexación por cuanto de levantarse la orden acatada actualmente se estaría incurriendo en un doble pago prestacional y por ende en detrimento patrimonial”* a las arcas públicas”.

## **2.6. Alegatos**

### **2.6.1 Parte Demandada: UGPP.**

En esencia, la parte accionada alegó de conclusión ratificándose en los hechos y pretensiones esbozados en el libelo de contestación, en particular que de ordenar revocar la decisión se estaría ante un desacatamiento a una orden judicial; que revocar un acto ilegal, que derivó de una acción delictual no es una conducta errónea; que de conceder las pretensiones se causaría un detrimento continuado al erario; que la decisión administrativa cuya revocatoria depreca el actor, se encuentra en firme; además que se trata de un acto administrativo de ejecución, al que no le cabe ser objetado.

### **2.6.2 Parte actora.**

Surtido el traslado, el demandante no presentó alegatos.

## **2.7 Concepto del Ministerio Público.**

La procuraduría 173 Judicial I Para Asuntos Administrativos no emitió concepto en esta ocasión.

## **2.8 Trámite Procesal**

- La demanda fue presentada el 8 de junio de 2017, repartida el 9 de junio de ese mismo año y admitida en auto interlocutorio dictado por este Juzgado el 25 de octubre de 2017.
- Surtidos los trámites de notificación y contestada la demanda por la parte accionada, en providencia del 13 de agosto de 2018, se fijó fecha para la audiencia inicial que señala el artículo 180 del CPACA, para el día 28 de septiembre de 2018. En dicha diligencia, se surtieron las etapas de fijación del litigio, posibilidad de conciliación decisión de excepciones previas y decreto de pruebas. En la misma audiencia se dispuso prescindir de la audiencia de pruebas, en tanto que no hubo más elementos de convicción que recaudar, ello conforme a lo señalado en el artículo 179 del CPACA.
- En proveído del 23 de julio de 2020 el Despacho ordenó prescindir del recaudo de unas pruebas documentales, en particular, la Resolución RDP 033277 de 2016,

declaró precluido el período probatorio y corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones de conclusión. Surtido el traslado, la UGPP presentó alegatos de conclusión dentro de la oportunidad legal para hacerlo, mientras que el actor guardó silencio.

- Finalmente, y vencido el referido traslado para alegar, ingresa el proceso a Despacho en estado de dictar sentencia.

### **III. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO.**

#### **3.1. Validez de la actuación.**

Revisadas las actuaciones procesales, no se observan irregularidades procedimentales que conlleven a declarar la nulidad total o parcial de lo actuado.

#### **3.2. Problema jurídico:**

Como viene dicho en la audiencia inicial, el problema jurídico a resolver, hace referencia a si el señor Hernando León Gómez, tiene derecho a que la demandada le restablezca la indexación de la primera mesada pensional reconocida mediante la Resolución/1811-de-1997, se reintegren los valores causados por la disminución en su mesada a partir de agosto de 2015 y que los dineros recibidos por concepto de indexación fueron recibidos de buena fe, ello si hay lugar a la declaratoria de nulidad de la Resolución RDP 010901 de 2015.

#### **3.3. Tesis del Despacho.**

Para este Juzgado se deberán denegar las súplicas de la demanda, en razón a lo expuesto por las premisas normativas aplicables al caso, así como como la jurisprudencia de los Órganos de Cierre Constitucional y de lo Contencioso Administrativo, comoquiera que la Resolución/1811-de-1997 aquí demandada, fue expedida con plena observancia del debido proceso administrativo, que el actor no logró desvirtuar a lo largo del proceso, comoquiera que está claro que para tal revocatoria medió una orden perentoria de autoridad judicial penal, que ordenó a la UGPP revocar ese y otros actos administrativos de naturaleza pensional, aún sin el consentimiento de los titulares / beneficiarios, cuando tales actos derivaron de posibles conductas delictivas de los funcionarios que los expidieron, dando lugar a un reconocimiento pensional irregular, y como tal, proscrito expresamente por la Ley 797 de 2003 en su artículo 19.

#### **3.4. Premisas normativas – Jurisprudencia aplicable al caso en estudio.**

Atendiendo a la fijación del litigio arriba expuesta, el argumento central del actor se funda en las inconformidades derivadas del acto administrativo cuya censura pretende, por haber revocado un reajuste pensional sin su consentimiento, por ser el directo beneficiario de la pensión de retiro.

##### **3.4.1 Ley 1437 de 2011 artículos 93 y siguientes – revocatoria directa de actos administrativos – Ley 797 de 2003.**

El artículo 93 de la Ley 1437 de 2011(CPACA), señala:

**“Artículo 93. Causales de revocación.** Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”

Por su parte el artículo 97 del mismo Cuerpo Normativo expresa:

**“Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto.** Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.

*Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.*

*Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.*

*Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa”.*

Sobre la revocación directa de los actos administrativos particulares y concretos, es decir, cuando la administración ha concedido, extinguido o modificado derechos a una persona en particular, en casos de actos administrativos de carácter pensional, en los que dicha persona no presta su consentimiento o bien se niega a hacerlo, para que la decisión sea revocada o modificada, ha sido objeto de examen por parte del Consejo de Estado, en tanto que son casos en que se han reconocido derechos de carácter irrenunciables y de orden público, que implican incluso el carácter de derechos fundamentales, tales como el mínimo vital, la confianza legítima, seguridad jurídica y presunción de buena fe.

### **3.4.2. Revocatoria directa de actos administrativos de entidades de previsión social expedidos por medios ilegales – alcance.**

La ocurrencia de una ilegalidad faculta a la administración para revocar un acto administrativo particular y concreto aún sin el consentimiento del interesado. Dicha ilegalidad no surge por oposición a la ley o a la Constitución, sino que genera vicios en la voluntad de la entidad administrativa que expide dicho acto.

Al respecto, el Consejo de Estado puntualizó, sobre la revocación directa lo siguiente<sup>1</sup>:

*“Se requiere pues para revocar el acto administrativo de carácter particular, sin autorización escrita del administrado, como ya lo ha señalado la Sección Tercera de esta Corporación “que se trate de una abrupta, abierta e incontrovertible actuación ilícita o fraudulenta debidamente probadas...” Entendida tal actuación ilícita, como se dijo en párrafos antecedentes, como un vicio en la formación de la voluntad de la administración, que bien puede ocurrir por error, fuerza o dolo”*

<sup>1</sup> Consejo de Estado, sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 16 de julio de 2002, Radicación U-029 Consejera Ponente, doctora Margarita Olaya Forero.

Frente a la posibilidad de la administración de revocar actos administrativos que crean o modifican una situación jurídica de carácter particular o reconocen un derecho de idéntica categoría, deberá estudiarse lo establecido por el CPACA, así como lo establecido en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, norma ésta que consagró una modalidad de revocatoria directa y que al respecto señala:

***“Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes”.***

La norma en cita fue objeto de estudio de exequibilidad por la Corte Constitucional, en la sentencia C – 835 de 2003<sup>2</sup>, de la cual se derivaron las siguientes conclusiones:

- Que, una vez definido el asunto en cuestión, y en virtud a lo señalado en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, la Administración no podrá cuestionarlo indefinidamente.
- Que el incumplimiento de requisitos a los que alude la norma deberá ser determinante para la definición de la situación prestacional.
- Que, si de la revisión del reconocimiento prestacional se vislumbra un incumplimiento de requisitos legales, para la revocatoria del acto será necesario contar con el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho o en su defecto de sus causahabientes; si no se logra este consentimiento, la autoridad que expida el acto administrativo deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (acción de lesividad).
- No obstante lo anterior, si se suscita el incumplimiento de requisitos como consecuencia de una conducta delictual debidamente comprobada la revocatoria del acto procede, aun sin el consentimiento del particular afectado.

Para los casos en que en el trámite administrativo de reconocimiento pensional se esté incurriendo en una conducta punible, la precitada sentencia C 835 de 2003 señaló:

*“(…)Cosa distinta ocurre cuando el incumplimiento de los requisitos aludidos esté tipificado como delito y la Corte señala claramente que basta con la tipificación de la conducta como delito, para que la administración pueda revocar, aunque no se den los otros elementos de la responsabilidad penal, de tal manera que en el evento de que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa o se halla comprobado el incumplimiento de los requisitos, basta con que sean constitutivos de conductas tipificadas por la ley penal, hipótesis en la cual se inscribe la utilización de documentación falsa, en conexidad o no con conductas tipificadas por la ley penal*

<sup>2</sup> Corte Constitucional – Sala Plena, Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003. Referencia: expediente D-4515 Demandante: Jorge Miguel Pauker Gálvez. Magistrado ponente: Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA Bogotá, D. C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil tres (2003).



*tales como el cohecho, el peculado, etc. Como que se trata de una circunstancia de ostensible ilegalidad, respecto de la cual, "(...) la aplicación del principio de buena fe deberá operar es en beneficio de la administración para proteger el interés público, pues en este caso la actuación fraudulenta con la que se dio origen o desarrollo a la actuación de la administración rompe la confianza legítima que sustenta la presunción de legalidad del acto expedido bajo tales circunstancias"*<sup>3</sup>.

### 3.5. Caso Concreto

#### 3.5.1 Hechos Probados

De las pruebas obrantes en el plenario, se advierte que:

- Que, mediante la Resolución No. 037141 del 19 de febrero de 1986, confirmada por la Resolución No. 029628 del 6 de marzo de 1986, se le reconoció y otorgó pensión de jubilación al señor Hernando León Gómez, por parte de la extinta Empresa Puertos de Colombia -Terminal Marítimo y Fluvial.
- Que a través de la Resolución No. 1811 de 25 de noviembre de 1997, el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia "FONCOLPUERTOS", indexó la primera mesada del señor León Gómez, elevando el monto pensional en la suma de \$1.108.869.00., quedando ésta en \$ 3.447.919, a partir del 1° de diciembre de 1997.
- Que mediante Resolución RDP 010901 del 19 de marzo de 2015, se disminuyó el monto pensional a la suma de \$2.172.383.49, por considerar que la indexación aplicada en el año 1997, fue obtenida ilegalmente suspendiendo los efectos jurídicos de la Resolución No. 1811 del 25 de noviembre de 1997. En dicha resolución se expuso, entre otras cosas, lo siguiente:

*"(...)  
 2. En orden al restablecimiento del derecho dispuesto en el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal (ley 600 de 2000) como desarrollo del artículo 250 de la Constitución Nacional y con el fin allí indicado esto es con el objeto de hacer cesar los efectos creados por la comisión de ilícitos aquí investigados en concurso, los Cuales como se ha dicho además de haber sufrido el patrimonio estatal la mengua histórica de lo ordenado cancelar sufre la mengua pasada, presente y futura ante la incidencia de lo reconocido en las mesadas pensionales esta Delegada procederá a suspender provisionalmente (mientras en el juicio se profiere sentencia y se torna decisión definitiva) los efectos jurídicos y económicos de las resoluciones y de las sentencias, mandamientos y actas de conciliación objeto de investigación y que se concretan en el siguiente cuadro..."*

*... Resolución Beneficiario  
 Valor 1811 25/11/1997 ROBERTO DEVIA GARCIA Y OTROS reajusta pensión por indexación. \$49.44.5.560.00.  
 (...)."*

#### 3.5.2 Análisis de las pruebas obrantes frente al caso concreto.

La controversia que nos ocupa se originó en la disminución del monto de la pensión reconocida a favor del demandante, señor Hernando León Gómez, mediante Resolución No. 1811 del 25 de noviembre de 1997.

---

<sup>3</sup> Sentencia T-631 de 2000

Radicado No.: 08001-3333-006-2017-00171-00  
 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho  
 Demandante: Hernando León Gómez  
 Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales "U.G.P.P."

La anterior decisión fue tomada por el Grupo Interno para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia mediante Resolución No. RDP 010901 del 19 de marzo de 2015, cuyas consideraciones se fundamentaron tal como se transcribe a continuación:

*"(...)*

*Que la SUBDIRECCIÓN JURÍDICA PENSIONAL -mediante memorando UGPP No. 20159010021943 del 26 de enero de 2015, manifiesta:*

*(...)*

*Para el trámite correspondiente le informo que la Fiscalía Primera Estructura de Apoyo para Foncolpuertos profirió Resolución de Acusación que hoy se encuentra en firme, en contra del señor MANUEL HERIBERTO ZABALETA exgerente general de la empresa Puertos de Colombia, dentro del sumario No. 2040 por el delito de Peculado por Apropiación, en la cual, entre otras determinaciones, se dispuso "4... ORDENAR la SUSPENSIÓN de los efectos jurídicos y económicos de las (sic) actos administrativos, sentencias, mandamientos y/o conciliaciones, acorde con la relación del cuadro inserto en el numeral 2 de otras determinaciones; como consecuencia del análisis precedente.*

*Comunicar lo anterior al "G. I. T." Ministerio de Protección Social y en consecuencia librar los oficios allí señalados..." (Negrilla y subrayado fuera del texto original)*

*De conformidad con lo expuesto, al proceder a ubicar a los beneficiarios de los títulos suspendidos en la resolución de acusación se encontró que el señor(a) HERNANDO LEON GÓMEZ cédula de ciudadanía. 5549836, es beneficiario del Siguierte título suspendido en la decisión judicial: Resolución No. 1811 de 25/11/1997.*

*(...)*

*Finalmente le solicito, remitir al Grupo Interno de Penales copia del acto administrativo que concluya la actuación derivada de la presente solicitud, en el cual se indiquen los valores adeudados a la Nación por concepto de cobros indebidos fundamentados en los títulos cuyos efectos se suspendieron.*

*(...)*

*Que las providencias del 20 de diciembre de 2011, proferida por la Fiscalía Primera de la Estructura de Apoyo Foncolpuertos, adscrita a la Unidad Nacional de Administración Pública y la providencia del 07 de noviembre de 2012 proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ FISCALÍA VEINTIDOS, fueron allegadas por la SUBDIRECCIÓN JURÍDICA PENSIONAL.*

*Que se procederá a dar estricto cumplimiento a la sentencia judicial en virtud de lo preceptuado por el artículo 454 del Código Penal y los artículos 34 y 35 numeral primero respectivamente de la Ley 734 de 2002 que señalan la obligación del funcionario público de dar cumplimiento a las sentencias judiciales.*

*Que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN mediante providencia del 20 de diciembre de 2011 consideró y resolvió:*

*(...) OTRAS DETERMINACIONES:*

*1. Se mantendrá vigente la medida de aseguramiento que de detención preventiva sin beneficio de excarcelación pesa en contra de MANUEL HERIBERTO ZABALETA RODRIGUEZ por subsistir las circunstancias que*

ameritaron su imposición, aunado al hecho que hasta la fecha el procesado sigue eludiendo la acción de la justicia, lo que hace necesaria su mantenimiento, aclarando que la medida lo es por todos los actos administrativos por los que se profiere resolución de acusación y que se concretarán en el acápite siguiente sobre el restablecimiento del derecho.

En consecuencia, se insistirá en su captura.

2. En orden al restablecimiento del derecho dispuesto en el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal (ley 600 de 2000) como desarrollo del artículo 250 de la Constitución Nacional y con el fin allí indicado esto es con el objeto de hacer cesar los efectos creados por la comisión de ilícitos aquí investigados en concurso, los Cuales como se ha dicho además de haber sufrido el patrimonio estatal la mengua histórica de lo ordenado cancelar sufre la mengua pasada, presente y futura ante la incidencia de lo reconocido en las mesadas pensionales esta Delegada procederá a suspender provisionalmente (mientras en el juicio se profiere sentencia y se torna decisión definitiva) los efectos jurídicos y económicos de las resoluciones y de las sentencias, mandamientos y actas de conciliación objeto de investigación y que se concretan en el siguiente cuadro...

... Resolución Beneficiario

Valor 1811 25/11/1997 ROBERTO DEVIA GARCIA Y OTROS reajusta pensión por indexación. \$49.44.5.560.00.

De la anterior decisión se dará cuenta la GIT o en quien en su momento haga sus veces....

.....en mérito de lo anteriormente expuesto EL FISCAL DELEGADO ADSCRITO AL DESPACHO UNO DE LA ESTRUCTURA DE APOYO PARA FONCOLPUERTOS DE LA UNIDAD NACIONAL DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, RESUELVE:

1. DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN de la acción penal que se siguió respecto. de MANUEL HERIBERTO ZABALETA RODRIGUEZ por el delito de PREVARICATO POR ACCION conforme al artículo 83 del C.P.P. y en consecuencia ORDENAR LA PRECLUSION DE LA INSTRUCCIÓN en su favor por éste delito, acorde con las previsiones del artículo 39 del C. de R.P. y por las razones expuestas precedentemente...

2. PROFERIR RESOLUCION DE ACUSACION en contra de MANUEL HERIBERTO ZABALETA RODRIGUEZ de condiciones conocidas en autos como autor a título doloso del delito de RECLAMADO POR APROPIACION en la modalidad de CONTINUADO, en la cuantía Jo \$171.859.213.178.98 por los hechos derivados de los actos administrativos, sentencias, mandamientos y actas de conciliación relacionadas en el segundo cuadro inserto en esta providencia y acorde con el artículo 397 del C. de P.P y los argumentos esbozados en las consideraciones de este proveído(....)

(...)

4 ORDENAR LA SUSPENSION de los efectos jurídicos y económicos de las (SIC) los actos administrativos, acorde con la relación del cuadro inserto en el numeral 2 de otras determinaciones y de las sentencias, mandamientos y/o conciliaciones, que aquellos - cancelan como consecuencia del análisis precedente. Comunicar lo anterior al CU Ministerio del Trabajo o a quien haga sus veces en su momento y en consecuencia librar los oficios allí señalados (...)

Que la UNIDAD DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA FISCALIA - VEINTIDOS mediante providencia del 07 de noviembre de 2012 resolvió:

(...)PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad, la resolución adiada el 20 de diciembre de 2011, mediante la cual la Fiscalía Primera de la Estructura de Apoyo Foncolpuertos, adscrita a la Unidad Nacional de Administración Pública, profirió resolución de acusación en contra del señor MANUEL HERIBERTO ZABALETA RODRIGUEZ como presunto autor a título de dolo del delito de PECULADO POR APROPIACION AGRAVADO P07: LA CUANTÍA \$171.859.213.178.98, CONSUMADO, EN LA MODALIDAD DE CONTINUADO.

(...)

Que la resolución relacionada en el numeral segundo en el acápite de "otras determinaciones" que beneficio al pensionado HERNANDO LEON GOMEZ, ya identificado, es la 1811 25/11/1997.

- En consecuencia, de lo anterior, el valor de la mesada pensional que actualmente percibe el señor HERNANDO LEON GOMEZ, debe ajustarse al monto devengado antes de aplicar la resolución 1811 25/11/1997.  
(...).".

Como se anotó en líneas antecedentes, el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra el deber que tienen los funcionarios que expiden un acto administrativo o sus superiores, de revocarlo de oficio o a solicitud de parte en tres eventos, a saber: **i)** Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución o la Ley, **ii)** Cuando no estén conformes con el interés público o social o, atenten contra él, o, **iii)** Cuando con ellos se cause un agravio injustificado a una persona.

De la resolución acusada, se desprende que la administración toma como fundamento, lo señalado en el primer evento, es decir, por ser manifiestamente opuesto a la constitución o la ley, lo que quiere decir que hizo uso de una de las causales que autorizan la revocación.

No obstante, con la decisión de la administración se pretendía afectar una situación jurídica de carácter particular y concreta, reconocida a favor del demandante mediante Resolución No. 1811 de 25 de noviembre de 1997, en los términos y dentro del tope allí fijado; por lo tanto, la administración, en principio, debía atender las previsiones del artículo 97 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo antes citado que exige: (...)Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando la decisión, expresa o ficta, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular."

De otra parte, el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, dispone que los entes de previsión social que reconozcan pensiones o prestaciones periódicas de esa naturaleza, tienen el deber oficioso de verificar que se cumpla el lleno de requisitos para adquirir el derecho con arreglo a la ley y velar por la plena legalidad de los instrumentos que soporten el lleno de requisitos para acceder a la prestación periódica a cargo del Erario, "cuando quiera que existan motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica" Por ello, contempló la norma tantas veces enunciada, que (...) "En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes."

De la lectura completa y armónica de la sentencia previamente citada, mediante la cual se declaró exequible condicionalmente el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, se puede colegir sin dubitación alguna que, como en el presente caso, la presunta irregularidad encontrada por la administración en el acto de reconocimiento pensional del demandante, se desprende de conductas tipificadas como delito por la ley penal, es decir, estamos en presencia de la revocatoria de un acto administrativo de reconocimiento pensional en el que media, presuntamente, un delito para su obtención, de modo que no era necesario el procedimiento y exigencias previstas en los artículos 97 y siguientes del CPACA, sin que se debiera obtener el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho y sin adelantar una actuación administrativa para revocar directamente el acto o acudir a la jurisdicción contenciosa para que dirimiera el conflicto.

De la prueba documental aportada al proceso se observa que, en efecto, de conformidad con los considerandos de la Resolución No. RDP 010901 del 19 de marzo de 2015, arriba transcrita, la justicia penal ordinaria realizó un pronunciamiento judicial en torno al reconocimiento de la pensión otorgada al señor Hernando León Gómez, ordenando suspender provisionalmente los efectos jurídicos y económicos de la Resolución No. 1811 de 25 de noviembre de 1997, que lo beneficia, ajustándose el valor de su mesada pensional, al monto devengado antes de la aplicación de esta resolución citada, por lo que se concluye, sin mayor análisis, que la resolución demandada en este proceso, fue el resultado del acatamiento de la decisión tomada por la jurisdicción penal ordinaria.

Verificada la actuación de la administración, fuerza concluir que, el acto administrativo de revocatoria no incurrió en violación de la ley ni en expedición irregular, por lo que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad del mismo, razón suficiente para negarse las súplicas de la demanda.

#### **IV. COSTAS**

Teniendo en cuenta que la conducta del demandante a lo largo del proceso, el Juzgado se abstendrá de condenarla en costas, en razón de que la parte vencida no asumió una conducta que la hiciera merecedora a ello, tal como el haber incurrido en temeridad, irracionalidad absoluta de su pretensión, en dilación sistemática del trámite o en deslealtad procesal.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley;

#### **FALLA**

**Primero.** - Niéguese las súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

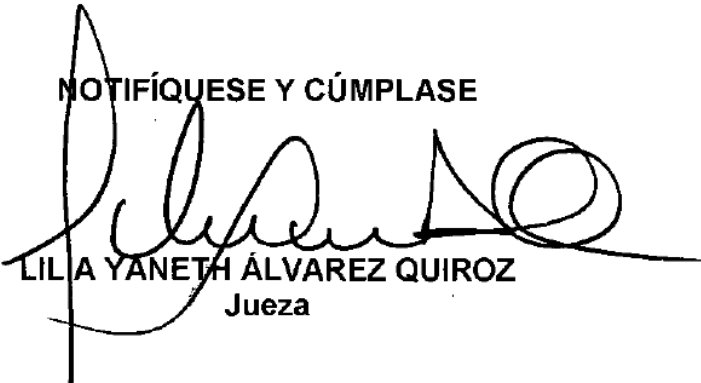
**Segundo.** - Abstenerse de condenar en costas a la parte demandada, por las razones expuestas.

**Tercero:** Notifíquese la presente sentencia a la Procuradora Delegada del Ministerio Público ante este juzgado.

*Radicado No.: 08001-3333-006-2017-00171-00*  
*Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho*  
*Demandante: Hernando León Gómez*  
*Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales "U.G.P.P."*

**Cuarto.** - Una vez ejecutoriada esta sentencia, archívese el expediente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**LILA YANETH ÁLVAREZ QUIROZ**  
**Jueza**

ACO